



confederación sindical de comisiones obreras
Secretaría General | Gabinete Económico Confederal
Fernández de la Hoz, 12. 28010 Madrid. Tel.: 917028018

| www.ccoo.es

INFORME DE COYUNTURA LABORAL. FEBRERO 2018

Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras

2 de marzo de 2018

El empleo que se crea tiene fecha de caducidad

El mercado de trabajo ofrece datos favorables en su coyuntura en febrero: crece el empleo, aunque la baja del paro es más estadística que real. La precariedad sigue siendo la marca España en materia laboral, con una fuerte brecha de género en el desempleo (6 de cada 10 son mujeres) y en la protección por desempleo (la tasa de cobertura de las mujeres es 10 puntos menor).

Febrero: crece el empleo, no baja el paro y persiste la brecha de género

En febrero la afiliación a la Seguridad social sube en 81.483 personas y el paro registrado baja en 6.280 personas, aunque esta bajada es más estadística que real, ya que las personas no ocupadas demandantes de empleo crecen en 6.114 personas y el total de demandantes de empleo inscritos crece en 9.362 personas. La precariedad laboral y el paro afectan a la mitad de la población activa de este país. Las mujeres suponen 6 de cada 10 personas en paro (hay 2 millones de mujeres en paro) pero suponen menos de la mitad de la población con trabajo.

La rotación laboral está en máximos, concentrada en empleos muy precarizados

En 2017, el 1% de los empleos asalariados soportó el 40% de la contratación temporal, vinculada a contratos de muy corta duración (horas, días).

La protección por desempleo tiene una brecha de género de 10 puntos

Los niveles de protección contra el desempleo siguen en mínimos: 1,51 millones de personas en paro carece de prestación y poco más de la mitad de la población en paro registrado cuenta con algún tipo de protección, que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. La tasa de cobertura bruta frente al desempleo fue del 56% en 2017, aunque con una importante brecha de género: la tasa de cobertura de las mujeres (52%) es 10 puntos inferior a la de los hombres (62%).

No se consolida un cambio del modelo productivo

Los indicadores siguen mostrando la debilidad del cambio del modelo productivo: la actividad y el empleo siguen concentrados en los sectores tradicionales. La creación de empleo viene impulsada por actividades de bajo valor añadido: construcción, comercio, hostelería y servicios auxiliares, con un peso limitado pero creciente de industria, servicios públicos y de sectores de intensidad tecnológica media y alta.

Comisiones Obreras defiende cambios del modelo productivo y laboral para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos, que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. Apuesta por potenciar la negociación colectiva y la mejora sostenida de los salarios y las pensiones, y por una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva y aumentar los niveles de protección social, especialmente de las personas que padecen las consecuencias negativas de la crisis.

LA PRECARIEDAD LABORAL: MARCA ESPAÑA

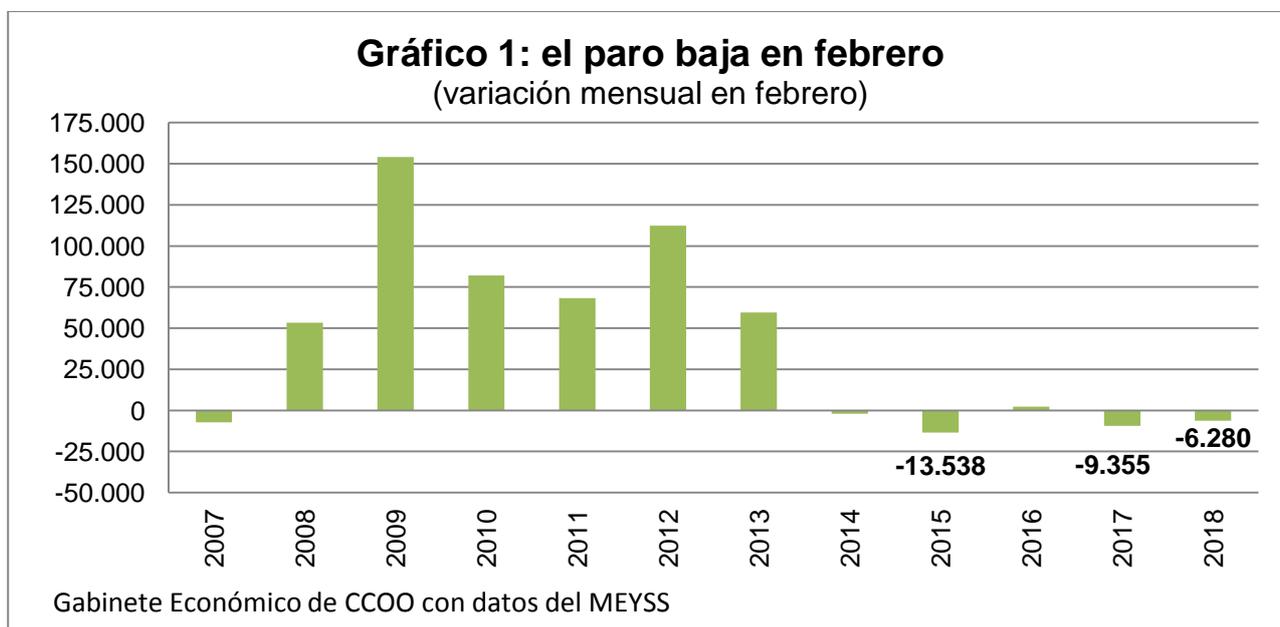
La precariedad laboral, entendida como la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas condiciones dignas de vida, afecta a la mayoría de la población trabajadora de este país, ya sea en su nivel máximo (población en paro y sin ingresos) o en sus diferentes grados según la calidad de las condiciones laborales. El indicador más grave de precariedad laboral es el paro: la existencia de altas tasas de desempleo, de paro de larga duración, de población en paro sin prestación o de población desanimada excluida de las estadísticas. Otros indicadores de precariedad laboral es la desigualdad laboral, la brecha salarial de género, la creciente tasa de temporalidad, el empleo a tiempo parcial, las horas extras no pagadas o el deterioro de los indicadores de accidentes de trabajo y salud laboral.

El paro no baja en febrero y mantiene su fuerte feminización

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo se sitúa en 3.470.248 personas, tras bajar en febrero en 6.280, frente al descenso de febrero de 2017 (-9.355). La bajada mensual del paro se concentra en el sector servicios (-15.133 personas), industria (-4.010) y construcción (-3.800) mientras sube en agricultura (10.846) y en el colectivo sin empleo anterior (5.817). El descenso del paro en términos desestacionalizados se sitúa en 23.139 personas en febrero y en términos anuales se modera ligeramente hasta las 280.628 personas (-7,5%).

Se mantiene la alta feminización del paro en España: hay 1.997.878 mujeres en paro, el 57% del total. En febrero el paro baja ligeramente en las mujeres (-3.171) y los hombres (-3.109) y en términos anuales el paro solo baja la mitad en las mujeres (-106.044, -5,0%) que en los hombres (-174.584, -10,6%). En febrero el paro subió entre los menores de 25 años (8.348, 3,12%) y bajó en las personas de 25 y más años (-14.628, -0,5%).

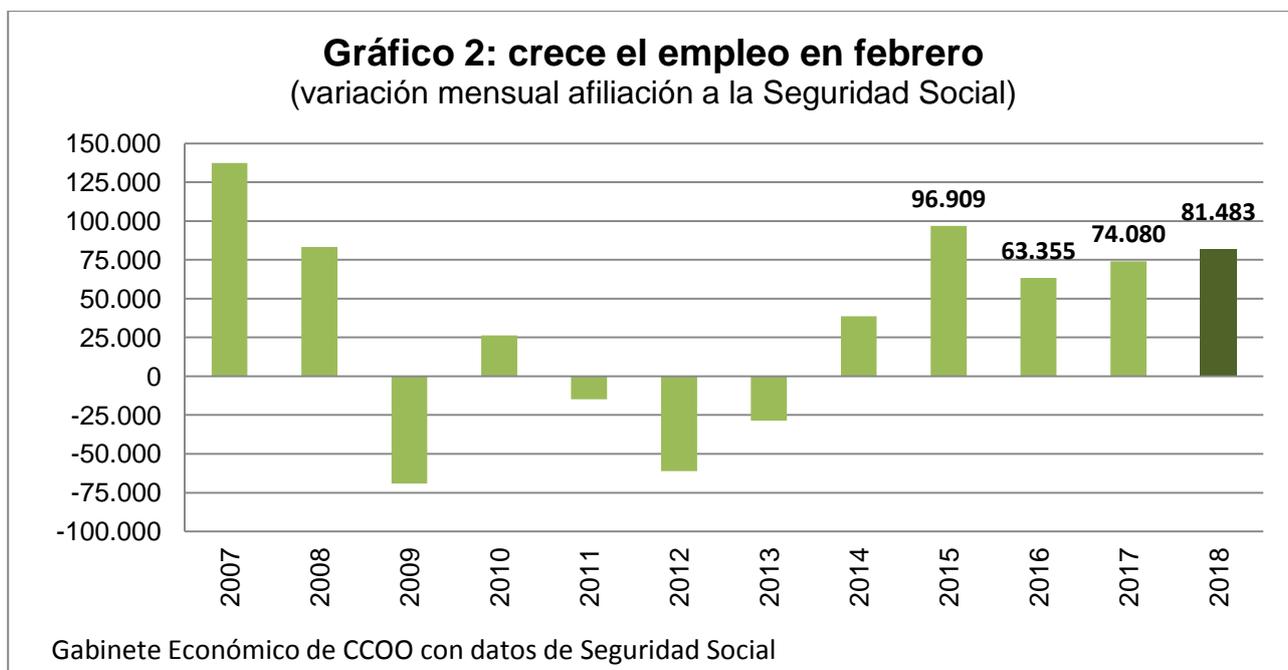
La población inscrita en los servicios públicos de empleo es muy superior al dato de paro registrado. La cifra de demandantes de empleo sube en 9.362 personas en febrero y se sitúa en un total de 4.770.583 personas, 1,3 millones por encima del dato de paro registrado, ya que hay 254.585 demandantes de empleo no ocupados (6.114 más que enero) y otros 1.045.750 demandantes de empleo ocupados que buscan una mejora de empleo, un empleo especializado o tienen disponibilidad limitada. Es decir, en febrero, la bajada del paro es estadística, no real.



El empleo crece en febrero

La afiliación media a la Seguridad Social sube en febrero 81.483 personas, más que en 2017 (74.080). Al corregir el efecto estacional la subida mensual se limita a 62.006 personas. En términos interanuales la afiliación al conjunto del sistema aumenta en 615.259 personas y se sitúa en 18.363.514, de las que el 46,3% son mujeres. Destaca siempre el gran número de bajas netas de afiliación a fin de mes: entre el 27 y el 28 de febrero las empresas dieron de baja en la Seguridad Social a 141.848 trabajadores y trabajadoras en términos netos, descontadas las altas, reflejo de la gran rotación y precariedad de nuestro mercado laboral.

En febrero, el aumento interanual de la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en el 3,47%, un crecimiento superior al empleo en la EPA (2,6% anual en el 4t2017) y al de la economía (3,1% en 2017). No obstante, hay que tener en cuenta que los datos de afiliación a la Seguridad Social sobreestiman la creación del empleo, al registrar como aumento neto lo que no es más que un efecto estadístico (en el sector público las altas se registran en el régimen general de la Seguridad Social, pero gran parte de las bajas se apuntan a clases pasivas).



La población trabajadora cada vez soporta peores condiciones laborales (ver tabla 1). Menos de la mitad de la población afiliada al régimen general en 2017 tenía un contrato indefinido a jornada completa (47,9%) y la mayoría (52,1%) presentaba algún tipo de precariedad: contrato temporal y/o trabajo por horas. El empleo indefinido a jornada completa empezó a perder peso al inicio de la recesión por el avance de las jornadas parciales y más recientemente por el repunte del empleo temporal. En 2007 la foto de la precariedad venía marcada por el empleo temporal, ahora también la jornada parcial tiene un peso relevante en la precariedad laboral.

Tabla 1: Crece la precariedad del empleo en España

Distribución de la afiliación al régimen general de la Seguridad Social por tipo de contrato

(Excluidos los sistemas especiales Agrario y de Empleados de Hogar)

AÑO	Contrato indefinido			Contrato temporal		Formación y prácticas	Otros
	Completa	Parcial	Fijo discontinuo	Completa	Parcial		
2007	49,8%	7,4%	1,4%	26,0%	8,0%	1,3%	6,1%
2008	51,4%	7,9%	1,5%	23,6%	8,1%	1,2%	6,3%
2009	53,1%	8,7%	1,7%	19,7%	8,4%	1,0%	7,3%
2010	52,5%	9,2%	1,8%	18,6%	9,1%	0,9%	7,9%
2011	51,9%	9,6%	1,9%	17,6%	9,6%	1,0%	8,4%
2012	51,9%	10,1%	2,0%	15,7%	10,2%	1,0%	9,0%
2013	51,6%	10,8%	2,2%	15,1%	11,0%	1,1%	8,2%
2014	50,0%	11,0%	2,3%	15,7%	11,3%	1,5%	8,2%
2015	48,9%	11,0%	2,3%	16,7%	11,3%	1,8%	7,9%
2016	48,4%	11,0%	2,4%	17,4%	11,4%	1,7%	7,7%
2017	47,9%	11,0%	2,4%	18,4%	11,4%	1,4%	7,5%

Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de los datos de la Seguridad Social

La EPA confirma la precariedad del empleo generado en la recuperación (4t2013-4t2017): se han creado 1,86 millones de empleos, la práctica totalidad asalariados (1,83 millones) y la mitad de ellos temporales (918.000), lo que explica el repunte de la tasa de temporalidad del 23,7 al 26,7 por cien y un total de 4,3 millones de personas con contrato temporal. El trabajo a jornada parcial creció durante la recesión y su peso en el empleo asalariado subió del 11,8% (4t2007) al 17,7% (2t2014), para caer con la recuperación hasta el 16% (4t2017) ante el repunte del empleo a jornada completa.

Modelo de crecimiento, temporalidad y rotación

El grueso del PIB se compone por la demanda interna agregada, donde el principal elemento es el consumo interno y en menor medida la inversión. Para impulsar el consumo interno es imprescindible el crecimiento del empleo y, sobre todo, de los salarios medios. La recuperación de la inversión depende de la confianza del sector privado en la sostenibilidad de la actual fase de crecimiento y de la recuperación del gasto y la inversión pública tras años de recortes.

La precariedad laboral, en sus diferentes formas, afecta a la mayoría de la clase trabajadora y ha aumentado durante la crisis: temporalidad, tiempo parcial, empleo autónomo, devaluación salarial, siniestralidad laboral. La etapa de crecimiento ligada a la burbuja inmobiliaria se caracterizó por el aumento de la precariedad y la desigualdad. La recesión y la larga crisis dispararon aun más los niveles de desigualdad y pobreza laboral. La actual etapa de crecimiento viene marcada por el fuerte repunte de beneficios y dividendos y la precariedad del empleo creado, lo que aumenta la desigualdad y lastra las posibilidades de desarrollo.

En la creación de empleo en España siguen predominando sectores poco productivos, donde lentamente van ganando peso sectores y actividades de mayor valor añadido y con poca contribución del empleo público. La recuperación económica reactivó la creación de empleo desde finales de 2013, apoyada en factores coyunturales (“vientos de cola”) como la bajada del precio del petróleo, la devaluación del euro, la política expansiva del Banco Central Europeo que redujo la prima de riesgo y los tipos de interés o la pujanza turística ante la inestabilidad de otros destinos alternativos. El agotamiento de estos factores coyunturales positivos condiciona la evolución futura de la economía española y su crecimiento (3,1% en 2017).

Lentamente la creación de empleo se diversifica por sectores

En febrero el empleo crece en la mayoría de sectores. Destaca el aumento de afiliados al régimen general en educación (32.013, 12.244 más que febrero de 2017), hostelería (21.312), construcción (21.015), e industria manufacturera (15.323) y la pérdida de empleo en comercio (-16.058).

En 2017, dentro del régimen general de la Seguridad Social, se ha mantenido el impulso en la creación de empleo del sector servicios, con un fuerte repunte de la construcción (+10,4%). El aumento interanual del empleo en 2017 lo encabeza construcción (72.886 personas más), actividades administrativas y servicios auxiliares (71.979), comercio (66.624), industria manufacturera (65.091), Administración Pública (57.003), sanidad y servicios sociales (56.421), hostelería (56.321), educación (47.972) y transporte y almacenamiento (36.949). El empleo neto creado en 2017 se distribuye así: el 33% se concentra en servicios administrativos y auxiliares, comercio y hostelería; el 27% en servicios con fuerte presencia pública (AAPP, educación, sanidad y servicios sociales); el 12% en la construcción; el 11% en la industria manufacturera; el 6% en transporte y almacenamiento; el 5% en las actividades profesionales, científicas y técnicas; el 4% en información y comunicaciones.

La evolución del empleo desde el inicio de la recuperación en 2013 (según la EPA, ver tabla 2), muestra la preponderancia del sector privado en la creación de empleo, con un repunte mayor de los sectores que más empleo destruyeron durante la crisis (construcción, industria) y un crecimiento sostenido del empleo en los servicios de mercado. La aportación del sector público a la creación de empleo es todavía limitada, herencia de la política de recortes y austeridad y la ausencia de oferta pública de empleo.

Tabla 2: El sector privado impulsa la creación de empleo

	4t2017 (miles)	4t2013 (miles)	Variación (miles)	Variación (%)	Empleo creado (distribución %)
Asalariados sector público	3.075	2.909	165	5,7	9%
Ocupados sector privado:	15.924	14.226	1.698	11,9	91%
Agricultura	812	770	42	5,5	2%
Industria y energía	2.679	2.315	364	15,7	20%
Construcción	1.134	981	152	15,5	8%
Servicios de mercado	10.657	9.497	1.160	12,2	62%
Empleo doméstico	642	663	-21	-3,2	-1%
TOTAL POBLACIÓN OCUPADA	18.998	17.135	1.863	10,9	100%

Fuente: Gabinete Económico a partir de la EPA

Tras cuatro años de recuperación económica y creación de empleo, se aprecia una mayor aportación de nuevos sectores a la creación de empleo, que inicialmente ha estado impulsada por la hostelería y el comercio. En cuatro años (4t2013-4t2017) la población asalariada ha aumentado en 1,83 millones de personas (ver tabla 3). Industria manufacturera y hostelería concentran la mayor parte del empleo asalariado neto creado, aunque el crecimiento relativo es casi el doble en hostelería (+34%) que en la industria manufacturera (+18%). Destaca igualmente la recuperación del empleo en la construcción (+23%) y actividades inmobiliarias (+50%), tras la fuerte destrucción vivida durante la recesión, reflejo de la reactivación de estas actividades. En el lado contrario el sector financiero (-7%) ha seguido perdiendo empleo entre 2013 y 2017, al igual que los hogares empleadores de personal doméstico y las actividades de electricidad y gas. Las ramas de Administración Pública, servicios administrativos y auxiliares, comercio y educación aumentan su empleo menos que la media en los cuatro años de recuperación.

Tabla 3: La creación de empleo asalariado se diversifica por sectores

Población asalariada por rama de actividad	4t2013 (miles)	4t2017 (miles)	Variación:		Peso en la variación (%)
			miles	%	
TOTAL ECONOMÍA	14.094	15.923	1.829	13,0	100,0
C Industria manufacturera	1.861	2.202	341	18,3	18,6
I Hostelería	991	1.330	339	34,2	18,5
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.294	1.480	186	14,4	10,2
G Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos	2.085	2.245	161	7,7	8,8
F Construcción	674	827	153	22,7	8,4
P Educación	1.104	1.211	107	9,7	5,8
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	515	620	105	20,5	5,8
H Transporte y almacenamiento	690	773	82	11,9	4,5
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	453	523	71	15,6	3,9
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	245	312	68	27,7	3,7
S Otros servicios	248	311	64	25,7	3,5
J Información y comunicaciones	472	530	58	12,3	3,2
O Administración Pública, defensa y Seguridad Social	1.273	1.330	57	4,5	3,1
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	814	860	46	5,6	2,5
L Actividades inmobiliarias	56	84	28	49,6	1,5
E Agua, saneamiento, residuos y descontaminación	117	138	21	18,0	1,1
B Industrias extractivas	30	31	0	1,3	0,0
D Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	79	75	-5	-5,8	-0,3
T Hogares empleadores de personal doméstico	663	642	-21	-3,2	-1,1
K Actividades financieras y de seguros	432	401	-31	-7,1	-1,7

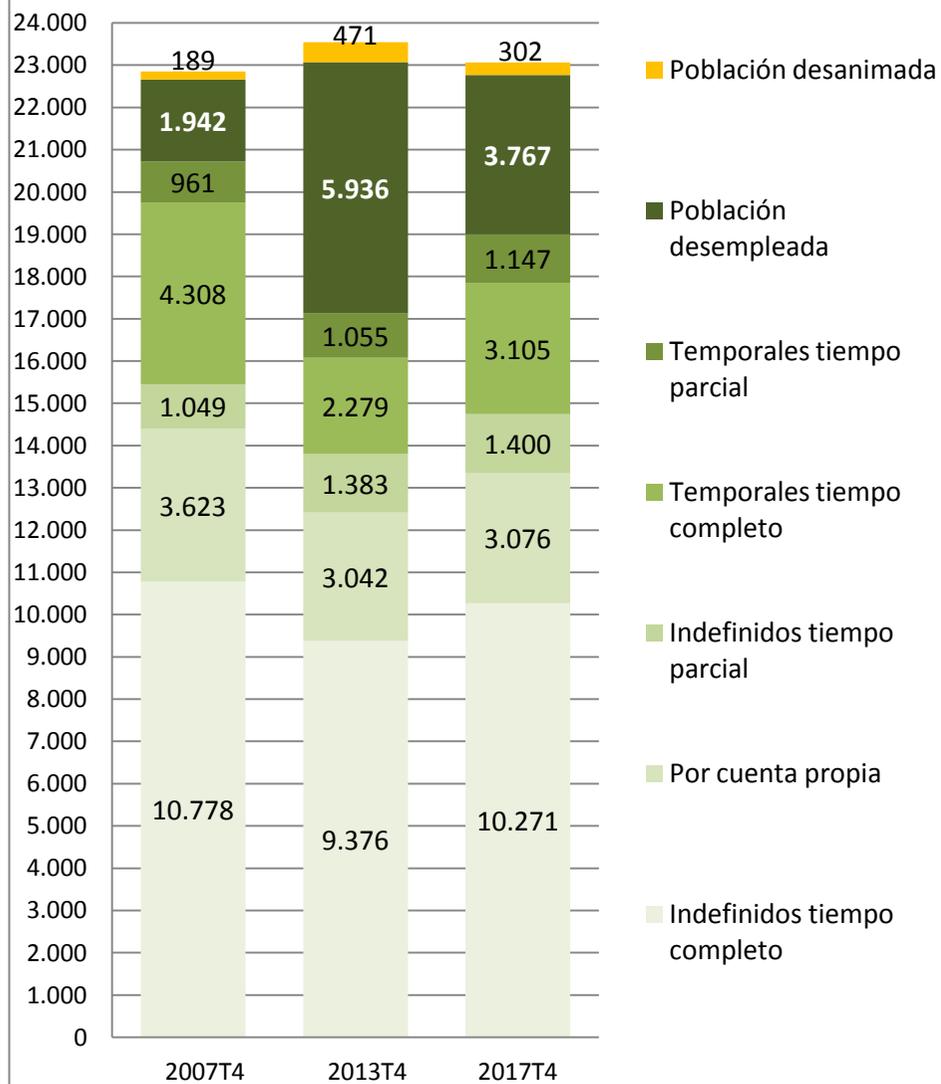
Fuente: Gabinete Económico de CCOO a partir de la EPA

En España, la mayor parte del empleo se ubica en actividades de bajo contenido tecnológico y solo el 7% de la población ocupada trabaja en sectores de contenido tecnológico medio y alto. Los años transcurridos de recuperación económica (4t2013-4t2017) muestran que sigue sin consolidarse un cambio ni del modelo productivo: el 89% de los puestos de trabajo generados en términos netos se ubican en actividades de contenido tecnológico bajo, y solo el 11% en ramas de contenido tecnológico medio y alto de la industria y los servicios. El empleo está creciendo más en los sectores de media y alta tecnología, pero su peso laboral es tan reducido que apenas mejora la composición del empleo total.

Los gráficos 3 y 4 de la EPA muestran que **la reducción del desempleo en la recuperación se logra en gran medida a costa de disparar de nuevo los niveles de precariedad** en un mercado de trabajo ya muy castigado tras años de despidos masivos, elevadas tasas de paro, devaluación salarial, aumento de la explotación laboral y de las horas extras no pagadas ni compensadas,...

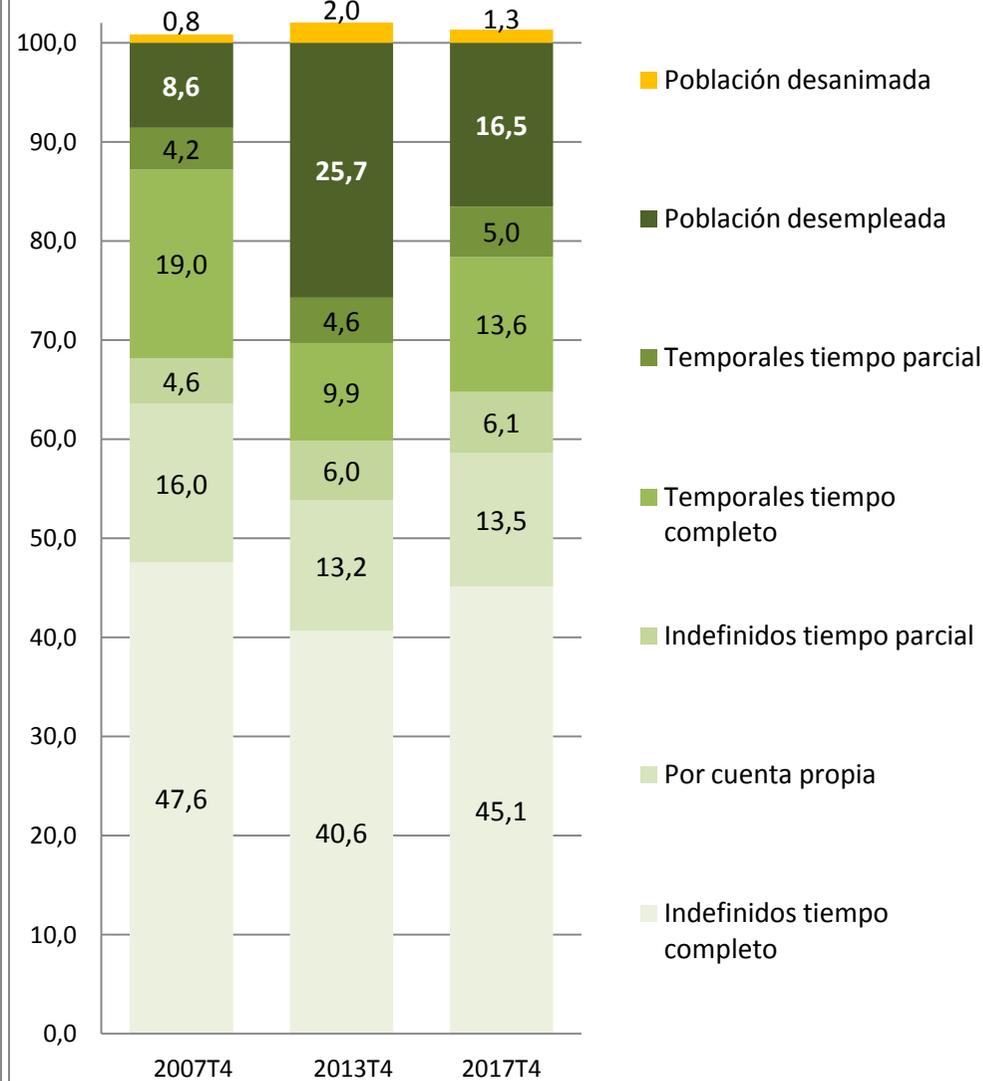
El desglose de la población activa en el cuarto trimestre de 2017 ofrece una imagen clara de la extensión de la mancha de la precariedad laboral: el 16,5 por cien de la población activa está desempleada, el 5 por cien son temporales a jornada parcial, el 13,6 por cien temporales a jornada completa, el 6,1 indefinidos a tiempo parcial, el 13,5 por cien es población ocupada por cuenta propia (con muchas situaciones diferentes dentro de este colectivo). Solo el 45,1 por cien de la población activa en España tiene un trabajo asalariado indefinido a jornada completa.

Gráfico 3: Composición de la precariedad laboral
Población activa (miles de personas)



Gabinete Económico de CCOO con datos de la EPA

Gráfico 4: Distribución de la precariedad laboral
Población activa (porcentaje)



Gabinete Económico de CCOO con datos de la EPA

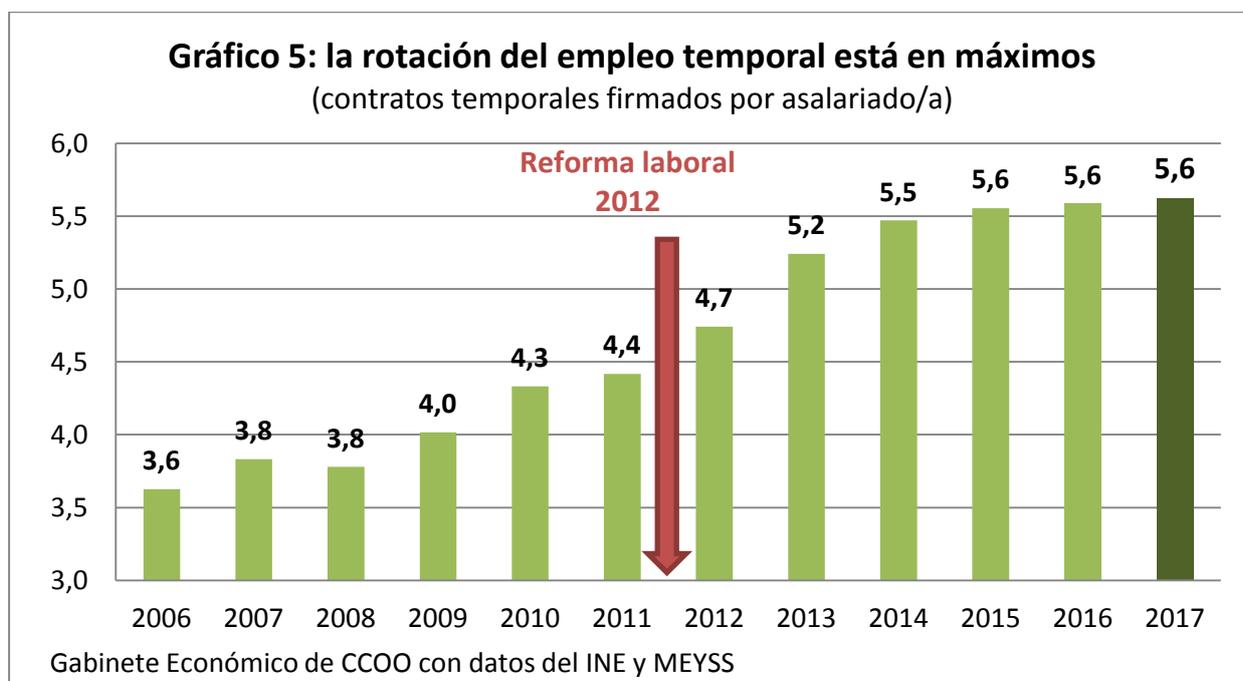
El mercado laboral se encoge y “mejora” las estadísticas laborales

La recuperación ha reactivado la creación de empleo -aunque sea precario- y ha reducido el paro, pero además la pérdida de población producida en la parte final de la recesión y el inicio de la recuperación ayudó a “mejorar” las estadísticas laborales. Según la EPA, el descenso del paro es mayor que la creación de empleo y hay otros factores que explican la bajada del paro: en los últimos años ha caído la población (envejecimiento, emigración) por la pérdida de población activa al tiempo que crece la población inactiva (personas desanimadas, que se jubilan,...).

La población activa alcanzó su nivel máximo en 2012. Entre el cuarto trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de 2017 la población activa cayó en 595.000 personas (bajó de 23,4 millones a 22,8 millones). En estos cinco años la población desempleada bajó 2,25 millones, pero la población ocupada solo creció en 1,66 millones, la diferencia se explica por el descenso de la población activa, mucho más acusada entre los hombres (-488.000) que entre las mujeres (-108.000). No obstante, persiste una importante brecha de género: todavía hay 1,6 millones menos de mujeres que hombres incorporadas a la actividad laboral, lo que revela obstáculos en el acceso al empleo y maquilla las estadísticas laborales de las mujeres.

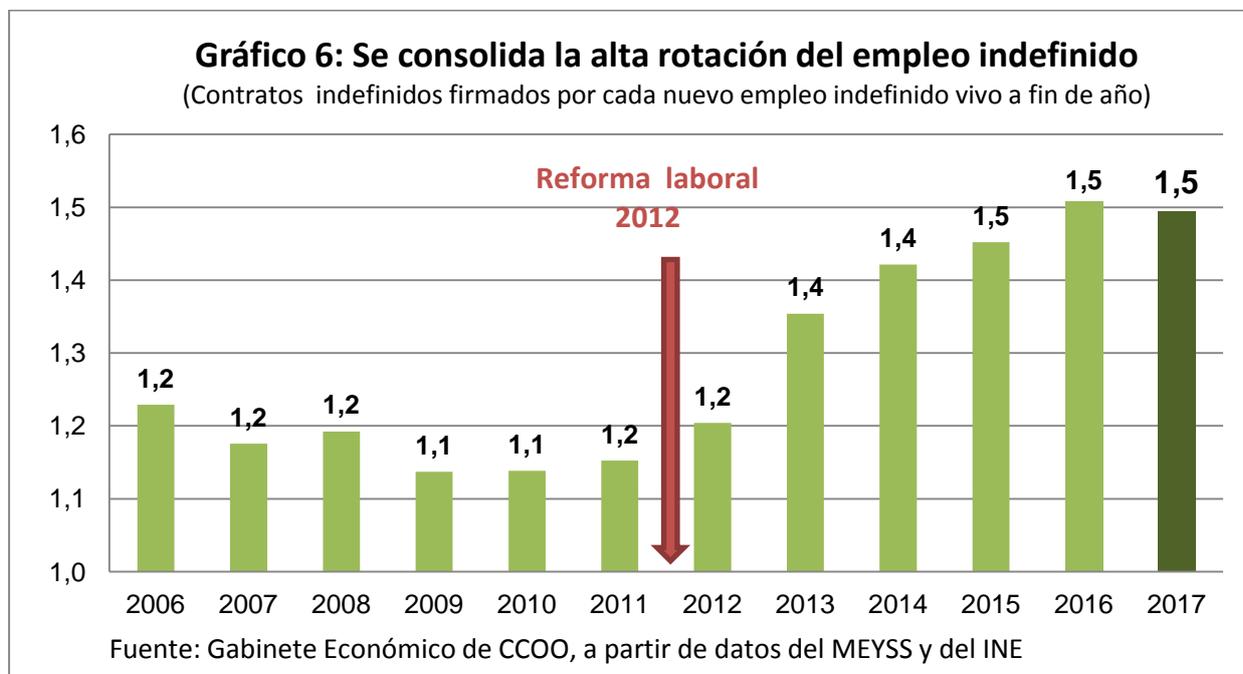
Rotación y precariedad del empleo

La elevada rotación laboral de la población asalariada con contrato temporal es un rasgo característico de la precariedad, que ha aumentado con la crisis, especialmente tras la reforma laboral de 2012. La población asalariada temporal contratada en 2006 tuvo que firmar 3,6 contratos de media para trabajar durante todo ese año. En 2017 ha sido necesario que firmen una media de 5,6 contratos temporales para trabajar todo el año, reflejo de la creciente rotación en el empleo temporal consolidada tras la reforma laboral (ver gráfico 5).



Tras la reforma laboral de 2012, la rotación del empleo también afecta cada vez más a la contratación indefinida, como muestra el gráfico 6. El repunte de los contratos indefinidos

firmados es simultáneo a su menor supervivencia laboral, lo que consolida una menor eficacia en la creación de empleo indefinido. Ahora hace falta firmar más contratos para mantener los nuevos empleos indefinidos: en 2009 solo se necesitó firmar 1,1 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que pervivía a fin de año, en 2017 fue necesario firmar 1,5 contratos por empleo. Un tercio de los contratos indefinidos firmados en 2017 ha causado baja (despido,...) durante el año y solo dos tercios seguían existiendo al final de año.



La reforma laboral ha transferido una parte significativa del riesgo que implica crear un nuevo empleo desde el empresariado a la clase trabajadora, al hacer recaer sobre ella la mayor parte del coste y de las consecuencias negativas derivadas de las malas decisiones empresariales, a través de una mayor facilidad de despido a un coste menor. El Gobierno en lugar de incentivar y apostar por la mejora del modelo productivo, la inversión y el aumento de la productividad, sigue incidiendo en mejorar la rentabilidad empresarial a costa de comprimir los derechos laborales, “subsidiando” las malas prácticas empresariales más precarias a costa de las buenas prácticas empresariales y los derechos laborales.

Precariedad: el 40% de la contratación temporal se concentra en el 1% de los empleos asalariados

La elevada rotación laboral del empleo temporal surge que un número limitado de puestos de trabajo que acumulan una cifra muy elevada de contratos temporales, en muchos casos de apenas unas horas o días: en 2017 se han firmado 8,1 millones de contratos temporales con una duración igual o inferior a 1 mes, de los que 5,6 millones solo duraban 1 semana o menos.

Hay un flujo muy elevado de contratos temporales de corta duración que se concentra en un número limitado de empleos sometidos a una precariedad extrema. Según la EPA en 2017 hubo una media de 190.600 personas asalariadas temporales con una duración del contrato inferior a 1 mes. Como en 2017 se han firmado 8,1 millones de contratos con una duración igual o inferior al mes, cada uno de estos empleos requirió una media de 43 contratos temporales para estar cubierto durante todo el año. Son puestos de trabajo, no

quiere decir que sean las mismas personas las que firman esos contratos temporales de muy corta duración, aunque para una parte relevante sí es su realidad vital: enlazar contratos temporales por horas o días para subsistir. Gran parte de los contratos firmados se concentra en un pequeño porcentaje de empleos: en 2017 el 40 por cien de los contratos firmados tenía una duración no superior a 1 mes, pero solo el 1,2% de la población asalariada temporal tenía contratos de duración inferior a 1 mes.

Los datos de contratación nos muestran el flujo de acceso a la actividad laboral, pero no proporcionan la foto real del empleo existente, como evidencian los datos de rotación anteriores, donde se necesitan firmar muchos contratos temporales para consolidar el mismo número de jornadas de trabajo que un empleo indefinido. Solo el 0,4% de los contratos temporales tiene una duración firmada superior a 12 meses. Los contratos indefinidos firmados son muchos menos en cifras absolutas, pero debido a su mayor pervivencia, tienen un peso real muy superior en la duración/empleo generado. Valga como ejemplo gráfico que un puesto de trabajo puede ser cubierto durante 1 año por un contrato indefinido o por 365 contratos temporales de 1 día.

En 2017 se alcanzó un nuevo máximo con 21,5 millones de contratos firmados, el 91% temporales (59% a tiempo completo, 32% a tiempo parcial) y solo el 9% indefinidos (5% a tiempo completo, 4% a tiempo parcial). Solo 5 de cada 100 contratos fueron indefinidos a jornada completa, mientras que 95 de cada 100 contratos eran temporales o a jornada parcial y 32 de cada 100 contratos fueron temporales y a jornada parcial. Los datos de 2017 (cuarto año de la recuperación) empeoran los registros previos a la crisis y a la reforma laboral de 2012, que ha precarizado todavía más las relaciones laborales: se firman más contratos, pero todavía no han recuperado los puestos de trabajo destruidos por la recesión.

En febrero de 2018 se han firmado 1.546.402 contratos de trabajo, el 89% temporales y el 11% indefinidos (4 de cada 10 contratos indefinidos en febrero han sido a tiempo parcial). En febrero 3 de cada 10 contratos firmados eran temporales y a tiempo parcial.

La protección por desempleo es baja y con fuerte brecha de género

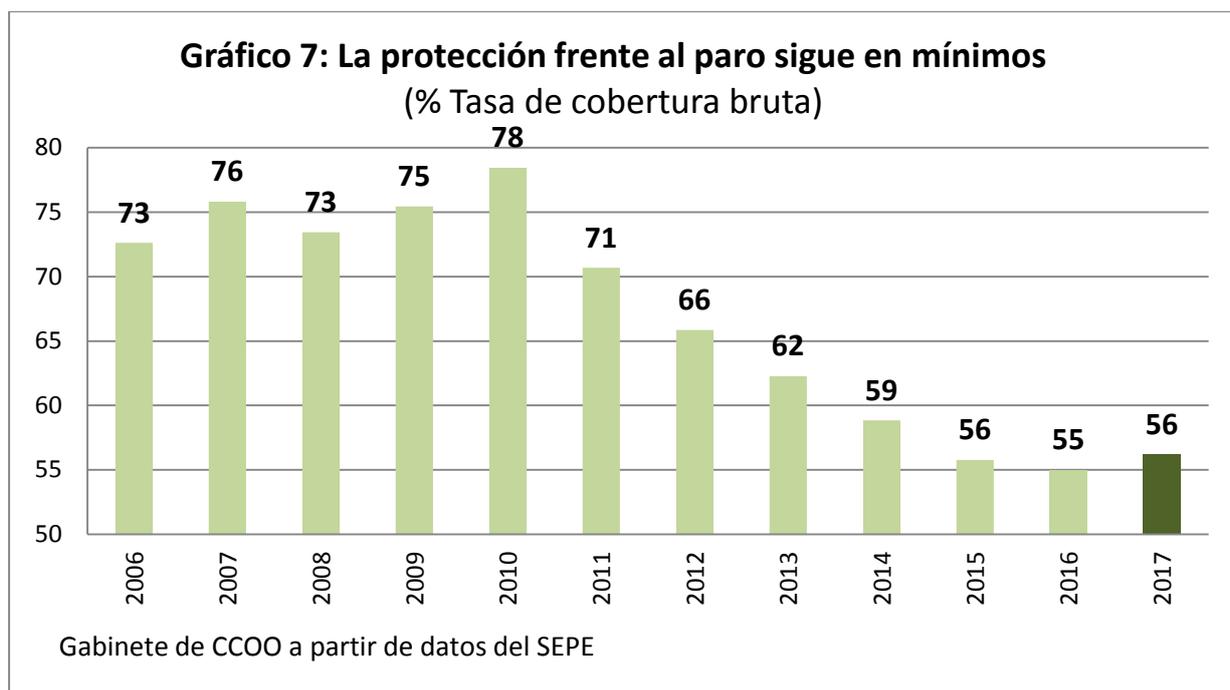
Casi la mitad de la población en paro registrado carece de prestación y de quienes cuentan con una, la mayoría solo percibe una asistencial.

La tasa de cobertura¹ del desempleo mejora en enero de 2018 (59%) aunque sigue en niveles bajos tras acumular una brusca caída desde 2010, cuando fue del 78,4% en media anual. La larga duración de la crisis y la profunda destrucción de empleo, ha provocado el enquistamiento del paro de larga duración que afecta a la mayoría de la población en paro y un descenso de la protección por desempleo, que se refleja tanto en el reducido porcentaje de población desempleada con prestación como en el deterioro de su calidad media, por el menor peso de las prestaciones contributivas y la menor cuantía media de las prestaciones percibidas. La tasa de cobertura bruta² del desempleo se situó en 2017 en el 56 por cien, un punto porcentual más que el año anterior, paliando ligeramente el fuerte recorte que acumula desde 2010 (ver gráfico 7) y que ha supuesto que poco más de la mitad de las personas en paro registrado cobre algún tipo de prestación o subsidio. **En 2017, la tasa de**

¹ Nuevo indicador de cobertura = Beneficiarios prestaciones/(paro registrado SISPE con experiencia laboral + beneficiarios subsidio eventuales agrarios)

² Los datos de prestaciones y tasa de cobertura corresponden al mes anterior al del paro registrado.

cobertura frente al paro de las mujeres (52%) ha sido 10 puntos inferior a la de los hombres (62%).



La larga duración de la crisis ha provocado que además de la caída de la tasa de cobertura se haya producido un descenso de la calidad de las prestaciones por desempleo, al agotarse las prestaciones contributivas, que han perdido peso a favor de las asistenciales. En 2017 ha mejorado levemente la calidad media de las prestaciones, a pesar de lo cual, en enero de 2018 el 56% eran prestaciones asistenciales y solo un 44% contributivas. En enero de 2018 había 3.476.528 personas en paro registrado, 1.523.250 personas carecían de prestación y 1.953.278 percibían algún tipo de prestación: 1.147.306 personas cobraban el subsidio, la RAI o el PAE y solo 805.972 la prestación contributiva.

El gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, se situó en enero en 839 euros mensuales (2,3% interanual) mientras que la prestación contributiva media por beneficiario se situaba en 827,2 euros mensuales (1,0% interanual). En 2017 se ha frenado el fuerte descenso acumulado en la cuantía media de las prestaciones por desempleo, pero sigue bajando el gasto total en desempleo por la caída del número de personas beneficiarias. El gasto en prestaciones por desempleo se ha recortado en 13.600 millones anuales (-42%) desde 32.238 millones (2010) a 18.638 millones (2016). En 2017 ha seguido cayendo el gasto en protección por desempleo (en diciembre baja un 3,1% interanual). En 2018 el gasto en prestaciones sigue cayendo (-0,8% interanual en enero)

Este recorte tiene su origen en un sistema de protección que no estaba preparado para una crisis tan profunda y con una duración tan larga, a la que se añaden los recortes ejecutados por el Gobierno y que no se han visto paliados con la fallida creación del Programa de activación para el empleo.

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE CCOO

España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio, servicios auxiliares) con un peso muy bajo de la industria y los servicios de alto valor añadido, lo que nos condena a un empleo precario y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para dar una oportunidad de empleo a su población. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de contenido tecnológico alto y apoyado por el sector público, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de la mejora de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro, como se ha evidenciado en las etapas de recesión.

El empleo que se crea es precario y temporal. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza. Es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro. La mejora acordada del SMI debe servir de estímulo para impulsar aumentos salariales en la negociación colectiva y en la calidad del empleo generado.

Cambios en la estructura productiva para un empleo de calidad

Ante este panorama, es necesario que el Gobierno lleve a cabo un giro hacia una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción. Los servicios de alto valor añadido, los servicios a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro deben ser la base del nuevo modelo.

Impulsar la negociación colectiva y una reforma fiscal progresista

Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y las trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad del empleo, exige derogar las dos últimas reformas laborales.

La economía española mantiene su expansión, con un crecimiento del PIB del 3,15 en 2017. Mientras, los beneficios empresariales suben (en 2015 ya se recuperó el excedente empresarial que tenían antes de la crisis) y los dividendos están en máximos, debido a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan. Con los datos provisionales de 2017, los convenios colectivos cubren ya a 7,7

millones de personas, con una subida salarial media del 1,44%, cinco décimas menos que la subida media del IPC y solo un 21% de esta población asalariada cuenta con cláusula de garantía salarial en su convenio.

Impulsar los salarios y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y garanticen la sostenibilidad de las pensiones.

Era imprescindible mejorar los salarios más bajos. El acuerdo para **subir el salario mínimo un 20% hasta 2020** y que se sitúe entonces en 850 euros brutos por catorce pagas es un avance en el objetivo de aproximar el SMI al 60 por cien del salario medio y beneficiará a un millón y medio de personas hasta 2020, según la estimación del Gabinete Económico de CCOO.

CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida por la población trabajadora de los sectores público y privado durante la recesión. España ha acumulado varios años con una inflación por debajo de la media, ganando competitividad vía precios, lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Los convenios colectivos negociados deben garantizar la mejora del poder adquisitivo, participar del reparto de la productividad generada e incorporar cláusula de garantía salarial. En el área pública, CCOO insta a la rectificación de todos los recortes laborales y salariales sufridos en el sector público durante la crisis y considera la oferta extraordinaria de empleo público una respuesta a la presión ejercida por los sindicatos.

Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes.

La senda de rebaja del déficit público para 2017 impuesta por la Comisión Europea al Gobierno implica más recortes del gasto público, penaliza el crecimiento económico, disminuye el ya de por sí lento ritmo de rebaja del desempleo y lastra la recuperación actual. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 han “cuadrado” las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder adquisitivo de empleados públicos, pensiones y población en paro. CCOO reclama una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y fomentando el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que incremente la productividad.

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el corto plazo, al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por eliminar el tope de las bases máximas de cotización por contingencias comunes y financiar las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

Mejorar la protección social de la población

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. CCOO, UGT y la mayoría de los Grupos Parlamentarios registraron una Proposición de Ley que pedía **garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017** y que fue rechazada por el Gobierno. Finalmente han perdido 1,7 puntos de poder adquisitivo en 2017 por la subida de los precios.

En paralelo a la mejora del SMI, los incentivos a la contratación deben concentrarse en las personas en paro de larga duración, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear puestos de trabajo, aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura está en mínimos), poner en marcha un Plan de Choque para la Recuperación de la Población en Paro de Larga Duración e implantar una Prestación de Ingresos Mínimos.

La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guie las decisiones económicas y laborales. En España hay 1,66 millones de personas paradas excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE³. Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una **Prestación de Ingresos Mínimos** en el conjunto del estado, como la impulsada por CCOO y UGT en el Congreso de los Diputados. Se trata de una prestación equivalente al 80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

El número potencial de beneficiarios se estima en 1,9 millones de personas y el coste anual bruto del programa estaría entre un mínimo de 6.509 millones de euros y un máximo de 12.074 millones, del 0,60% al 1,18% del PIB, una cifra perfectamente asumible en especial si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en 13.600 millones de euros en los últimos años o los 12.000 millones anuales que costado en términos de menor recaudación la última reforma fiscal del PP. Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el coste del programa. Un gasto necesario, en todo caso, en la situación de grave exclusión y necesidad de muchas familias sin ingresos y que, obviamente, se irá reduciendo de forma progresiva a medida que mejore la situación del empleo y la precariedad.

³ La cifra asciende a 2,2 millones de personas con los datos de paro de la EPA del 3t2017.